

EDITORIAL

# Lealtad negociadora

Las conversaciones entre el Gobierno de Rajoy y el PNV para los Presupuestos buscan dotar de estabilidad la legislatura

Los contactos entre el Gobierno de Rajoy y el PP, por una parte, y el Ejecutivo Urkullu y el PNV, por la otra, responden a la necesidad compartida de dotar de estabilidad a la legislatura en el conjunto de España. Las negociaciones avanzarán siempre y cuando la 'bilateralidad' que los nacionalistas buscan en las relaciones con el Gobierno central no llegue a incomodar ni a las otras formaciones necesarias para sacar adelante los Presupuestos –Ciudadanos fundamentalmente– ni a las demás comunidades autónomas, tan pendientes como el País Vasco de la orientación de las Cuentas Generales y a la espera de que se abran las conversaciones para un nuevo modelo de financiación territorial. Aunque tampoco al PNV y al Gobierno que comparte con los socialistas vascos les interesa que sus exigencias se vuelvan una afrenta a los demás, puesto que tanto los intereses de la sociedad vasca como los de sus instituciones dependen también de la gobernabilidad de España. Hay dos cuestiones de urgencia que son inexcusables en el marco de relación establecido entre el Gobierno Urkullu y el Ejecutivo Rajoy: el PNV reclama una liquidación definitiva del Cupo en torno a 1.500 millones de euros y la progresión en el trazado para el TAV. La negociación sobre otras posibles inversiones depende del cuadro de prioridades que el diálogo de la Administración central con los distintos gobiernos autonómicos y la propia discusión parlamentaria establezca, habida cuenta además que el País Vasco tiene un sistema diferenciado de financiación. Capítulo aparte merece la negociación sobre las transferencias pendientes, que lo están también de una interpretación compartida en cuanto al sentido con que las contempla el propio Estatuto. La fragmentación partidaria obliga a acuerdos y concesiones para que las instituciones funcionen. Pero las posibilidades de transacción no son infinitas, ni en términos financieros ni en cuanto a la dimensión jurídico-política de todo intercambio. Por eso mismo tampoco cabe jugar a varias cartas, convirtiendo el soberanismo en factor de presión negociadora.

## PRIMERA PLANA

ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER @aaguirredc

### Calvo Sotelo

La dictadura franquista se apropió de la figura del diputado monárquico José Calvo Sotelo como hizo con las del Cid y Carlos V, a quienes, en el futuro, puede ocurrir que en Torre Pacheco o en cualquier otro municipio, algunos políticos les retiren una placa o estatua por una mezcla de ignorancia histórica y jurídica. Las leyes, todas, hay que cumplirlas o cambiarlas democráticamente. También la de Memoria Histórica, de acuerdo a su espíritu y a su letra. Asesinado días antes del 18 de julio de 1936, Calvo Sotelo fue utilizado por Franco como símbolo del llamado alzamiento cuando hoy la mayoría de los historiadores documentan que el golpe contra la República llevaba tiempo en preparación. Pero parece que da igual que no fuera víctima directa de la Guerra Civil ni que apoyara la dictadura franquista. Más que nada porque ya estaba muerto, a su pesar. Ayer lo volvieron a enterrar PSOE, PP y Ciudadanos en Torre Pacheco.



## LA VERDAD

DIARIO DE LA MAÑANA FUNDADO EN 1903  
EDITA: LA VERDAD MULTIMEDIA S.A. DEPÓSITO LEGAL MU 3-1958

**Director** Alberto Aguirre de Cárcer

**Subdirector**  
Joaquín García Cruz

**Jefe de edición**  
Víctor Rodríguez Ríos

**Jefes de área**  
LOCAL. Manuel Buitrago Bernal  
y Ricardo Fernández Jiménez  
CULTURAS. Miguel Ángel Ruiz Parra  
DEPORTES. Francisco Lastra Lorca  
FIN DE SEMANA. Julián Mollejo

**Jefa de arte**  
Mar Saura Rosique  
**Jefe de fotografía**  
Enrique Martínez Bueso

**Delegados**  
Alicante  
Pedro López García  
Cartagena  
Gregorio Mármol  
Lorca  
Pilar Wals Rúa

**Director General**  
Antonio González García

**Director de marketing**  
José Manuel Jiménez Romera

**Director control de gestión**  
Miguel Iparraguirre Ovejero

**Directora comercial**  
Cristina Calzón Dilla

**Departamento de publicidad**  
MURCIA 968 27 23 19  
ALICANTE 965 92 22 82

# ¿Podemos pagar el tratamiento del cáncer?

FRANCISCO AYALA  
ONCÓLOGO DEL HOSPITAL MORALES MESEGUER



Los avances en la biología del cáncer han permitido incorporar nuevos fármacos, menos tóxicos y más específicos que la quimioterapia. Sin embargo, la escalada de precios los hace difícilmente soportables para los sistemas sanitarios en tiempos de crisis. Hay muchas maneras de abordar esta cuestión, ninguna sencilla. Bajar el precio de los fármacos sería una solución aparentemente directa, estableciendo precios razonables que reflejen los costes reales de producción e investigación, no tan transparentes, y el beneficio real del medicamento, a veces escaso. La mayoría de expertos coinciden en que son necesarios cambios regulatorios, pero este es un proceso difícil en un mercado internacional.

Así que la alternativa en muchos países ha sido limitar el acceso a ciertos fármacos excesivamente caros para el sistema público. En Inglaterra, el NICE (Instituto Nacional para la Excelencia Clínica) estableció que el coste máximo asumible para un año de vida ajustado a calidad (una medida que conjuga la duración con la calidad de la vida) era de 30.000 libras/año (en casos concretos, hasta 50.000 libras/año). Aunque la transparencia en el caso inglés es alta, estas decisiones han conducido a limitaciones para el acceso a bastantes fármacos oncológicos. Y lo más importante es que, bajo la apariencia de procedimientos exclusivamente técnicos, se esconden decisiones éticas: por ejemplo, la fijación de un umbral de dinero por año de vida con calidad busca la eficiencia máxima, sin considerar si el beneficio va dirigido a pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, o más leves. No parece que, al menos en España, ese criterio coincida con los valores de la mayoría de la población. Ni con la de los oncólogos, que probablemente estaríamos de acuerdo en que ganar seis meses es más importante si tu expectativa vital es de un año que si es de veinte.

¿Y qué pasa en España? Pues no se sorprendan: no disponemos de unas reglas del juego claras ni de un organismo independiente que decida qué medicamentos innovadores estamos dispuestos a financiar. Los intentos para generar informes comunes vinculantes han tenido un éxito relativo, y ha crecido la presión del gasto en fármacos nuevos sobre las comunidades autónomas, que han multiplicado las agencias y comisiones regionales y locales, con decisiones dispares. Esta situación de inequidad en el acceso a fármacos se ve además agravada porque en muchos hospitales los oncólogos siguen recibiendo presiones para controlar el gasto en fármacos, bien directas, o

bien mediante retrasos o cargas burocráticas disuasorias. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y las asociaciones de pacientes (GE-PAC) han denunciado este hecho, de momento sin gran repercusión.

Frente a debates alarmistas o sesgados, debe quedar claro que el problema no es que los gestores sanitarios se preocupen por el gasto, algo exigible a cualquiera que administre dinero público, sino que los criterios para limitarlo sean variables o arbitrarios. El conflicto entre la eficiencia y la necesidad que plantean los fármacos oncológicos, entre un utilitarismo poco compasivo y un prioritarismo absoluto que no dejara dinero disponible para otros tratamientos, no puede resolverse fácilmente. Así que la única forma de salir de este atolladero implica tanto una evaluación centralizada, como un proceso de deliberación ética y política para fijar los criterios comunes de esa evaluación y decidir cuanto dinero se puede emplear en el tratamiento del cáncer (o en el de la hepatitis). Un proceso en el que los profesionales deben participar, pero junto a otros representantes de la sociedad, políticos, bioeticistas y, por supuesto, pacientes.

A los oncólogos esta situación nos pone en una posición difícil entre nuestros pacientes y el sistema sanitario. El presidente de SEOM ha pedido públicamente abrir un debate, que además mandaría también a la industria farmacéutica un mensaje claro de cuánto estamos dispuestos a pagar por un determinado nivel de beneficio. Porque lo que los oncólogos no podemos hacer es tomar decisiones de racionamiento 'a pie de cama', opacas para el paciente y sin un marco de decisión equitativo. Podemos decidir, y lo hacemos todos los días, si es adecuado tratar o no a un enfermo, y evitar tratamientos fútiles. Pero no podemos juzgar, sin traicionar la confianza de nuestros pacientes, si 'merece la pena' gastar más o menos en un paciente concreto, o si 60.000 euros es un precio aceptable para un año de vida. Y tampoco deberían juzgarlo nuestros gestores solo con razones presupuestarias, porque los criterios no deben ser solo profesionales. Así que, aunque no sea políticamente fácil, necesitamos abordar ya un problema que sigue generando inequidades y gastos insostenibles. Con una discusión que, siguiendo al filósofo Norman Daniels, frente a los criterios localistas o arbitrarios, debería ser transparente, razonable y capaz de generar criterios iguales para todos los ciudadanos. Que, por si no lo saben, tienen una entre tres posibilidades de padecer un cáncer a lo largo de su vida.

## LV CONFIDENCIAL

Es socialista, pero asegura que no milita en ese partido, sino en el de Izquierda Unida-Verdes. Sus declaraciones, así de tajantes, dejaron desconcertados no solo a sus compañeros de escaño, sino también a muchos de los que integran la tribuna de visitantes. Ocurrió el pasado lunes en el Pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento de Lorca. En el último punto, ruegos y preguntas, la concejal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín Rodríguez, intervino. Le

contestó el alcalde, Francisco Jódar, que hizo alusión a su anterior militancia. Lejos de sentirse ofendida, la edil que ocupa escaño desde hace pocas semanas tras la marcha del anterior portavoz de IU-Verdes, José García Murcia, afirmó, alzando incluso la voz, que «sigo siendo socialista, pero no milito en el PSOE». Y añadió: «Me siento orgullosa de mi pasado». Caras de sorpresa de una y otra bancada, sobre todo, de quienes no tanto tiempo fueron sus compañeros de siglas, las del Partido Socialista Obrero Español, ya que Gloria Martín fue incluso candidata a las elecciones europeas por el PSOE.